



**DINOS LO
QUE PIENSAS**

 cronica@lidernsanantonio.cl

El costo de imponer decisiones políticas

Una compleja crisis interna afecta al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, luego de que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio decidiera remover a su directora, Loreto Maturana, en medio de la controversia por el nombramiento de la exministra Jeannette Vega como subdirectora médica. Lejos de ser una decisión aislada, lo ocurrido ha desatado un conflicto mayor que hoy compromete la estabilidad del recinto.

La situación se intensificó cuando al menos 17 médicos incluyendo especialistas únicos en sus respectivas áreas presentaron su renuncia en señal de respaldo a la gestión directiva y en rechazo a una decisión que, según han señalado, no obedece a criterios técnicos. En una carta pública, los profesionales fueron categóricos: hablan derechamente de una persecución política. No es un diagnóstico menor, y menos aún cuando proviene de quienes sostienen el fun-

cionamiento clínico del hospital. Resulta difícil justificar que, en un hospital destinado a ser de alta complejidad, se intervenga sin medir las consecuencias, interrumpiendo un proceso de instalación que ha seguido criterios de progresividad para resguardar la calidad y seguridad de la atención. Esto ocurre en un contexto donde, si bien la infraestructura está disponible, persisten brechas significativas de profesionales y técnicos, con un déficit estructural de más de un centenar de especialistas necesarios para su plena operatividad.

En ese escenario, forzar salidas y tensionar equipos no solo es imprudente: es derechamente irresponsable. Provocar la salida de médicos clave no es una señal de conducción, sino de descontrol, que pone en riesgo la continuidad de la atención, debilita la red pública y genera incertidumbre donde más se necesita estabi-

lidad.

Las consecuencias ya son visibles y no recaen en las autoridades, sino en las personas. Más de 190.000 habitantes del Litoral Central incluyendo la comuna de Navidad dependen de este hospital. Para ellos, esto no es un conflicto administrativo: es la diferencia entre tener o no acceso a atención oportuna.

La salud pública no puede ser rehén de decisiones políticas. No es un espacio para disputas de poder ni señales ideológicas, sino un sistema que requiere conducción técnica, estabilidad y respeto por los equipos. Lo que hoy ocurre en San Antonio es una advertencia clara: cuando la política se impone sobre la técnica, el costo lo paga toda la comunidad.

Carolina Quinteros Urquieta
exdelegada presidencial
provincial de San Antonio